



Huaorani recolectando frutos en el Yasuni (la camiseta del niño es propaganda de Repsol). Fotos de Mark Aguirre



## ¡Salvemos el Yasuní de las petroleras!

# ¿Golpe de timón en Ecuador?

por **Mark Aguirre**

**L**a iniciativa de salvar el Parque Yasuní del gobierno de Rafael Correa es una de las propuestas más creativas hechas por un gobierno latinoamericano. Trata de vincular un cambio de modelo económico insostenible basado en el petróleo con la lucha contra el calentamiento global. Este artículo, escrito tras una visita a la Amazonía ecuatoriana pretende explicar por qué tres años después el proyecto todavía no ha sido puesto en marcha. Si muere significaría una gran decepción en Ecuador y en todo el mundo en la lucha por salvar a comunidades indígenas y la biosfera.

Los pozos de petróleo Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) están en la esquina nororiental del parque nacional Yasuní, en la última frontera de la Amazonía ecuatoriana. El acceso a los mismos es difícil por las restricciones que imponen las petroleras Repsol y Petrobras. En marzo un pequeño grupo de funcionarios de medio ambiente de la prefectura de Orellana, activistas ambientales y periodistas pudo hacerlo desde Rocafuerte, el último pueblo ecuatoriano antes de la frontera peruana en la orilla del río Napo. La expedición constató que los pozos listos desde hace años para sacar el petróleo –solo falta conectarlos al oleoducto de crudo pesado que ya lleva petróleo amazónico a la refinería de Manta en el Pacífico– habían tenido sus primeros derrames. Era un mal presagio. Había alquitrán y brea en la selva incluso antes de empezar la explotación de unas bolsas que se supone poseen entre 900 y 1.530 millones de barriles, el 20% de las reservas petroleras ecuatorianas.

El parque Yasuní es un Arca de Noé de la biodiversidad y un espacio vital para la supervivencia de los taromenane y los

tagaeri, los grupos guerreros Huaorani que ganaron atención mundial en los años setenta cuando se negaron a ser contactados por misioneros y decidieron seguir viviendo en su territorio al sur de los pozos ITT como siempre lo habían hecho.

El caso del Yasuní sería uno más de los que enfrentan en el mundo a sucias petroleras con comunidades que defienden la naturaleza y su forma ancestral de vida, sino fuera porque el gobierno de la Revolución Ciudadana decidió lanzar en el año 2007 una iniciativa ambiental revolucionaria. Una iniciativa pionera con repercusiones globales que buscaba salvar a la selva y a su población originaria.

El gobierno, en un país que depende del petróleo, en un acto solidario, renunciaba a explotar los pozos dejando el petróleo en el subsuelo. De esa manera además de proteger la biodiversidad y a los grupos intangibles se evitaba la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO<sub>2</sub> a la atmósfera del planeta aminorando el calentamiento global. A cambio la Comunidad Internacional –con la idea de los que más contaminan tienen que hacer algo, tienen una deuda ecológica–





tour, recorriendo la Vía Auca, la única manera de acceder al Yasuní por tierra y canoa desde Coca, la capital de Orellana. La otra vía posible, la Maxus, está en manos de Repsol, quien explota el bloque 16, un territorio en la Reserva biosfera del Yasuní que fue “sacado” de los límites del parque para poder extraerse petróleo “legalmente”. Cuando se firmó la concesión Repsol no solo consiguió permiso para explotar el petróleo, consiguió además la administración de todo el territorio, el bloque, donde están los pozos. El Sr. Bolívar, el responsable en Coca de Repsol, un inmigrante del sur de Ecuador que lleva 25 años en Orellana, nos prohibió el acceso al parque. “No pueden pasar, pónganse en las oficinas de Repsol en Quito”, nos dijo. Veníamos preparados. Edy Quiz el jefe del departamento de epidemiología del Ministerio de Salud en Orellana con quien me había entrevistado, había acusado a Repsol de abuso de autoridad, cometer injusticias y violar la soberanía ecuatoriana. “Nadie puede entrar al Parque Yasuní sin su permiso. Ellos son responsables de los servicios sociales en cinco comunidades (3 Kichwas y 2 Huaorani) pero no podemos controlar siquiera si cumplen con sus obligaciones con las comunidades: No nos dejan entrar”.

En enero Repsol había impedido durante dos horas la entrada a la Ministra de Salud Caroline Chang que había viajado a inspeccionar los centros de salud en comunidades Huaoranis. Edy Quiz decía que su ministerio estaba investigando varias denuncias contra la petrolera. En concreto la muerte de una mujer en un parto y el de un niño picado por una serpiente a quien Repsol no pagó un viaje de evacuación a Quito para salvarle la vida. En UNESCO habían dicho que hasta el responsable del Parque Nacional Yasuní tenía que pedir permiso a Repsol para llegar al parque. El presidente Correa, en una visita que hizo a Orellana, había mostrado “su extrañeza” con la situación. ¿Cómo era posible que el



Oleoducto en la Vía Auca

gobierno ecuatoriano no pudiera acceder a su propio territorio? Edward Valladolid decía que había habido denuncias de derrames en los bloques 16 y 31 pero ¿cómo comprobarlas si los mismos que las provocan tienen bloqueado el acceso?

En la vía Auca diferente. Había puestos de militares, los grandes aliados de las petroleras –el petróleo se empezó a explotar en la Amazonía ecuatoriana cuando Ecuador estaba bajo una dictadura militar– pero el camino, asfaltado estaba bajo una dictadura militar– pero el camino, asfaltado estaba sólo cuatro años, estaba abierto. Hay un enorme cuartel donde se inicia la vía Auca. El gobierno tiene fuerzas especiales militares a cargo de las zonas petroleras. Los pozos, al ser





Alberto Acosta en su oficina en la FLACSO

declarados áreas de prioridad nacional –el petróleo financia casi un tercio del presupuesto del Estado– están bajo la ley de seguridad nacional. Los derechos están restringidos. “Las petroleras si alguien protesta llaman con sus radios y en diez minutos tienen 10 o 20 soldados a sus órdenes” había dicho en la oficina de Derechos Humanos en Coca.

Fueron soldados quienes abrieron la vía Auca a las petroleras. “No hay selva impenetrable sino hombres capaces de cumplir sus objetivos”, estaba escrito en un cuartel. En Ñonaeno, una comunidad de huaoranis contactados, Mario Milpo, él mismo un huaorani, contaba cómo guerreros atacaban a los soldados con lanzas y cerbatanas de más de tres metros cuando se abría la Vía. En la Amazonía ecuatoriana los conflictos entre colonos y pueblos originarios no es algo de las películas del oeste. En agosto del 2009 guerreros huaoranis posiblemente de los grupos no contactados taromenane asesinaron a lanzazos a varios miembros de una familia de colonos en la comunidad de Los Reyes. Se especula que colonos de esta comunidad estaban invadiendo su territorio. Ecuador es el país que más árboles ha cortado en la cuenca del Amazonas, incluso más que Brasil. Para algunos la explotación maderera es el principal problema del Yasuní y el mayor riesgo para los grupos intangibles.

Los colonos van siguiendo a los petroleros. Hace tan sólo 25 años, cuando la vía Auca se estaba construyendo, los kichwa, huaorani, Shuar y otros grupos eran la población mayoritaria en el Orellana. Orellana era prácticamente una selva, sin pozos

petroleros y grandes plantaciones de palmas aceiteras cómo lo es hoy. Actualmente la población originaria apenas representa el 30% de sus 100 mil habitantes. Llegaron colonos de todas las provincias. Ecuador tiene 6 millones de población activa y solo 1 millón y medio tienen empleo formal. Se asentaron en las orillas de la vía abierta en la selva. Las petroleras se encargaban de traer la luz, la necesitaban para las bombas que extraen el petróleo de sus pozos. Los colonos empezaron plantando café pero acabaron convirtiendo el bosque que quemaron en potreros. Algo que les permite trabajar en el petróleo. Un sector que paga bien.

A medida que recorríamos la vía Auca éramos testigos del desastre ambiental. Se veían oleoductos oxidados a ambos lados de la carretera. Tecnología de hacía 40 años. Tuberías que se rompían frecuentemente derramando el petróleo. En el Auca 14, en una instalación petrolera un mechero quemaba gas contaminado la atmósfera. Había pozos abandonados goteando petróleo. Pozos sépticos llenos de petróleo que se desbordaban cuando llovía. Piscinas de seguridad mal construidas; otras en el Auca 51 llenas de lodo de perforación y agua de formación sin ningún tratamiento vertiendo contaminantes a los esteros donde se abastecen las comunidades. Había casas al lado de piscinas de seguridad. En la comunidad de Florida todavía había rastros de un derrame ocurrido hacía cuatro meses. Habían venido a limpiarlo pero habían dejado brea escondida debajo de la vegetación. Un bidón lleno de alquitrán había sido abandonado. Pedro Lapa, uno de los campesinos afectados, decía que era el quinto derrame en el mismo lugar. Varios de sus pollos habían muerto y el petróleo había llegado a la fuente de agua que se abastece. Petroecuador se negaba a reconocer sus responsabilidades. El ministerio del ambiente miraba hacia otro lado, “se nos burlan”, decía resignado.

Me había llamado la atención que los guardianes de las instalaciones petroleras nos dejaban pasar cuando no estaba el encargado. Edwin conocía a todos y lo saludaban como quien saluda a uno de los suyos a pesar de que las compañías tienen mucho cuidado en contratar a los colonos que se atreven a poner denuncias a las petroleras. ¿Cómo era posible que nos



abrieran las puertas y nos permitieran tomar fotografías?

Edwin decía que colaboraban con ellos porque saben que la organización de derechos humanos en Orellana no está en principio contra la explotación petrolera. La defensa del medio ambiente no es lo mismo que conservar la Amazonía como un santuario inviolable. “Hay que integrar medio ambiente y desarrollo económico”, decía. Su organización se opone a la forma en como se saca el petróleo, por eso ayudan a las comunidades frente a las petroleras. Defienden el uso de una tecnología punta adecuada al medio ambiente (no sé si eso existe después de ver el desastre de BP en el Golfo de México), que no contamine, que no haga daño al bosque, a la salud, a las propiedades de los campesinos. Estos colonos que trabajan en el petróleo son víctimas de un fuego cruzado. Se benefician del desarrollo que trae la industria petrolera: empleos, mejores sueldos, más infraestructuras, pero sufren en sus propias carnes las consecuencias de ese tipo de desarrollo. Trabajan para las mismas compañías que contaminan el agua que beben sus familias, agua con la que hacen la colada sus mujeres y en la que bañan a sus hijos. Compañías que dañan a sus animales y a la tierra que cultivan. En Orellana, en las parroquias donde hay petróleo los casos de cáncer de piel y estómago en mujeres y niños se han disparado. Se han reportado casos de niños nacidos con deformaciones genéticas. Estas familias vivían a nivel micro el gran conflicto que vive Ecuador: ¿Cómo hacer compatible el buen vivir que busca la Revolución ciudadana con un modelo económico que para reproducirse por su base extractiva esta destrozando la Naturaleza con los efectos negativos que tiene para la vida humana y los ecosistemas?

\* \* \*

Antes de viajar al Yasuní había visitado en Quito a Alberto Acosta, el ex-ministro de energía que introdujo en el gabinete de Correa la iniciativa de no sacar el petróleo. “Cuando lo presenté en una reunión de gobierno parecía loco que el ministro a cargo del petróleo renunciara a explotar petróleo en una sociedad que no se imagina vivir sin petróleo”, decía. Ahora, distanciado del gobierno, trabaja como profesor-investigador en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su despacho tiene una soberbia vista de las faldas del volcán Pichincha. En una de las paredes hay un cuadro de Eloy Alfaro, el político liberal que separó a la Iglesia del Estado para modernizar Ecuador a

principios del siglo XX y que fue linchado en 1911 por turbas de católicos en las calles de Quito, después de que fuera acusado de masón desde los pulpitos de las iglesias. En otra hay reconocimientos por participar en la última Asamblea Constituyente, la de Montecristi, de la que fue su Presidente; fue el parlamentario más votado. Una Constitución aprobada el 28 de septiembre del 2008 en la que por primera vez en la historia mundial se da derechos a la Naturaleza convirtiéndola en un sujeto jurídico.

Él acusa a “presiones petroleras” de las dudas que el Presidente Correa ha empezado a tener sobre la iniciativa. Lo interpreta como una prueba de que la idea empieza a tomar fuerza entre la gente, “creían que no iba a prosperar en un país que es adicto al petróleo”. Acababa de regresar de Alemania, donde el parlamento seguía apoyando la propuesta del Fideicomiso. “La resistencia al proyecto es más de dentro de Ecuador que de afuera”, dice. En Quito era fácil ver carteles en defensa del parque y el futuro del Yasuní se había convertido en un tema habitual en los media. Encuestas hablan de que un 80% de los ecuatorianos con diferentes matices aprueban la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra.

El petróleo es desde 1972, cuando empezó su exportación, el principal eje de la economía ecuatoriana. Ecuador es el quinto productor latinoamericano, un promedio de 503.000 barriles por día en 2009. Antes lo había sido el banano y antes la plata y el oro. Son hidrocarburos el 53% de las exportaciones y el 26% de los ingresos del estado. Pero a pesar de ello los críticos de este modelo económico extractivista que se perpetua desde la colonia, entre ellos Alberto Acosta, dicen que Ecuador



Pedro Lapa mostrando basura petrolera abandonada en su propiedad



no ha logrado “desarrollarse” y al menos el 35 % de los ecuatorianos son pobres y un 13% vive en extrema pobreza. En un país al que le quedan a lo sumo 30 años de petróleo, explotar el ITT, dicen, sólo alargaría unos años más la enfermedad terminal de un modelo que genera distorsiones estructurales, monocultivos, pérdida de soberanía, corrupción, neoligarquía y dependencia.

**Correa parece tentado a ceder,  
en la pugna que hay dentro del  
gobierno, ante aquellos que defienden extraer  
el petróleo y los minerales.**



La iniciativa del Yasuní no había sido una idea de Rafael Correa, un Presidente que se incorporó a la actividad política en 2005 y llegó al gobierno en las elecciones de 2006, pero sí tuvo el coraje de hacerla suya; aunque no renunció a explotar el petróleo condicionándolo a conseguir el dinero para el Fideicomiso. Correa llegó a Alianza País desde la academia crítica al neoliberalismo, no desde los movimientos sociales, convirtiéndose en la cabeza de un movimiento que quería el regreso al centro de la vida pública de un Estado desarmado y desarticulado por el neoliberalismo. La Revolución Ciudadana

propuso, en un país en donde el poder y la riqueza han estado concentrados en un puño desde la colonia, la recuperación nacional de un Estado que había cedido su soberanía y sus obligaciones sociales. Correa formó su gobierno con gente de organizaciones populares que llevaban dos décadas luchando contra el neoliberalismo pero también con empresarios de Guayaquil y amigos de estudios que trabajaban en la iniciativa privada y en la administración. Una amalgama de fuerzas que pronto ha empezado a moverse en direcciones opuestas.

En los dos últimos años, por los gastos en infraestructuras, educación y salud necesarios para satisfacer los objetivos del Buen Vivir de la Revolución Ciudadana el presupuesto público se ha duplicado. Correa parece tentado a recurrir a la manera más fácil e inmediata de financiar la socialización del presupuesto echando mano de ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales perpetuando el viejo modelo productivo; cediendo, en la pugna que hay dentro del gobierno, ante aquellos que defienden extraer el petróleo y los minerales. Entre ellos Carlos Pareja Yannuzzi, ex-presidente de Petroecuador, actualmente cónsul en Houston, y Wilson Pastor, el ex-presidente de la cónsul Petroamazonas, nombrado en abril ministro de Recursos Naturales no renovables.

Se calcula que la explotación del ITT daría unos beneficios netos al Estado de 7 mil millones de dólares. A ello habría que sumar los beneficios de la empresa que lo explota, posible- mente Petroamazonas, con una inversión estimada en 15 mil millones de dólares. Un buen pastel para el Estado y las empresas que participen en la explotación. Los partidarios de extraerlo preguntan a Correa ¿por qué renunciar a ello si el Estado necesita dinero?

Correa está ampliando las fronteras extractivas de petróleo, para lo cual ha constituido Petroamazonas como una empresa del Estado pero estructurada como una empresa comercial. Está buscando capitalizarla con acuerdos con otras compañías petroleras, preferiblemente estatales. Quiere más dinero para el Estado del dinero que ahora ingresan las compañías petroleras extranjeras. Repsol, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana ENI extraen el 41% de los barriles ecuatorianos. Además ha apostado por el



María Fernanda Espinosa en el Ministerio Coordinador del Patrimonio



inicio de una nueva época productiva con la explotación de la minería a cielo abierto –conocida por sus enormes impactos negativos ambientales y sociales– en una zona muy rica en biodiversidad y compleja socialmente, en la cordillera del Condor, territorio ancestral de los Shuars.

En mayo la CONAIE (La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la principal organización indígena, que apoyó a Correa en su batalla por la Presidencia, rodeó el parlamento y cortó carreteras en protesta por la nueva Ley de Agua. Una ley que los indígenas ven favorable a empresas embotelladoras y mineras. Anteriormente habían llevado al constitucional la Ley Minera, que favorece las explotaciones a cielo abierto por considerarla anticonstitucional. Una resolución del tribunal hecha pública en marzo ha sido para el movimiento indígena más amarga que dulce. Mario Melo, uno de los abogados que presentó el recurso, decía que son intereses de corporaciones mineras y petroleras los que desde dentro del gobierno tratan de imponer las leyes de minería, del agua y de soberanía alimentaria que ponen en riesgo a la Constitución.

Las leyes han sido caracterizadas desde la oposición a las mismas como “contrarrevolucionarias” porque quieren dar marcha atrás en los logros alcanzados y plasmados en la nueva Constitución. Una Constitución que incorpora los derechos de la naturaleza, el buen vivir y la plurinacionalidad. Una Constitución que ha dejado bien claro que la naturaleza no es reducible a recursos económicos para mantener el crecimiento y que las comunidades indígenas tienen que decidir sobre su territorio.

Las movilizaciones sometían a fuego cruzado al Presidente Correa. Los movimientos sociales habían preparado su camino al poder después de derribar varios gobiernos en los últimos veinte años. En febrero de 1996 derribando al gobierno neoliberal de Abdalá Bucaram y en el 2000 al de Jamil Mahuad. En abril del 2005 los movimientos urbanos jugaron un papel destacado en la caída de Lucio Gutiérrez. ¿Le ocurrirá lo mismo a Correa?



Oleoducto en la Vía Auca

Alberto Acosta ha sido uno de los pioneros de Alianza País. Formó parte del grupo inicial que lanzó la revolución ciudadana, del que también formaba parte Correa. Acosta está haciendo un esfuerzo teórico por elaborar un ideario para la misma. Ha sido el recopilador de varios libros en los que se discuten los Derechos de la Naturaleza, la Plurinacionalidad y el Buen Vivir, ejes de la nueva Constitución. La revolución nada en ambigüedades que necesitan ser delimitadas. En su oficina de la FLACSO negaba que existiera una crisis de la Revolución Ciudadana. Tampoco veía en las movilizaciones un ataque a Correa, quien a su juicio era “víctima de sus contradicciones y temores”. “La Revolución Ciudadana ha avanzado mucho desde sus inicios al convertir propuestas importantes de la sociedad civil en políticas públicas”, decía. Ahora estaría atravesando un momento de definición tras el avance dentro del gobierno de los intereses de corporaciones extractivistas. Los sectores sociales que apoyaron la revolución desde la base estarían recordando en la calle a Correa, un presidente temperamental que gobierna a veces con el estómago, que no se olvide de que gobierna gracias a ellos.

El día que llegaba Hugo Chávez a Quito entrevisté a María Fernanda Espinosa. La Ministra Coordinadora de Patrimonio había sustituido a Fander Falconí como la responsable política de la iniciativa Yasuní en el gobierno. Aunque había otros temas en la agenda entre los dos gobiernos, Venezuela podía



ayudar a dejar el petróleo en la tierra si aceptaba enviar crudo pesado a la refinería de Manta. Los partidarios de sacar el petróleo arguyen que se necesita el petróleo del ITT para hacerla rentable. A los venezolanos les puede convenir enormemente porque acerca sus pozos a los mercados del Pacífico. Uno de los objetivos estratégicos de la Revolución bolivariana que trata de disminuir la dependencia petrolera con Estados Unidos.

María Fernanda Espinosa es una de las voces más reconocidas en defensa de la naturaleza en Ecuador. Antes de entrar en el gobierno con Correa había sido activista en organizaciones defensoras del medio ambiente y había trabajado con comunidades indígenas en la Amazonía. Ha sido ministra de Asuntos Exteriores. No veía el cambio de equipo como una marcha atrás de Correa en la iniciativa del Yasuní. Para ella se trataba de una necesidad de reformular "más atentamente" la redacción del Fidecomiso, que tenía fallas. "Había problemas en cómo llegan los fondos y cómo se gastan, la participación de la sociedad civil no estaba considerada, problemas de gobernanza sobre la gestión de los proyectos que financia el Fidecomiso, considerar el 40% de la superficie de Ecuador área protegida era irresponsable...", y aseguraba que "para Correa la iniciativa Yasuní sigue siendo el proyecto más importante del gobierno nacional".

A pesar de que la iniciativa, decía la ministra, seguía teniendo el respaldo político de Europa y su equipo había ampliado gestiones en países del Medio Oriente y Asia –había una oferta del gobierno alemán de dar un monto de entre 50 y 70 millones anuales durante 13 años y negociaciones con los gobiernos de Francia, Bélgica, Italia, Suecia y España–, estaba de acuerdo con Correa en que un país pobre como Ecuador no puede dejar de ingresar el dinero que obtendría explotando el ITT. Por eso decía que Ecuador debía tener listo el plan B, explotar los pozos, en caso de que no llegase el dinero de afuera.

Cuando había discutido con Alberto Acosta la "incertidumbre" financiera Acosta había dado un paso adelante en defensa de la iniciativa. Dada la importancia que ésta tiene en términos de proyecto de la Revolución Ciudadana, al ser considerada como un puente a un modelo económico sustentable no extractor, Ecuador, decía, "debería considerar la opción C, la de dejar el petróleo bajo el suelo aunque no llegara el dinero de afuera"; a cambio Ecuador ganaría un prestigio en términos de política ética y de vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Un prestigio que se expresaría económicamente en la expansión del turismo y la exportación de productos ecuatorianos.

\* \* \*

En el río Napo, el afluente del Amazonas en donde Francisco de Orellana empezó su aventura para conectar Quito con Manaus, el Pacífico con el Atlántico, barcazas cargadas con excavadoras, camiones cisternas y equipo petrolero se movían río abajo. En la comunidad kichwa de Sani, con territorio a ambos lados del río, a medio camino entre Coca y Rocafuerte, decían que a pesar de que las petroleras intentan dividir a las comunidades ofreciéndoles dinero, incluso organizando enfrentamientos fratricidas dentro de ellas, están resistiendo la propuesta de construir una carretera en la orilla norte del Napo que facilitaría la penetración petrolera y minera de la selva.

Las petroleras se mueven hacia el oeste de Sucumbíos y al sur en la zona del Yasuní, en Orellana, en busca de nuevos pozos. Los campos petrolíferos maduros de Petroecuador en la vía Auca, Sacha, Shushufundi y Lago Agrío se están agotando. Han reducido su producción en más de 110 mil barriles diarios desde 1994, cuando llegaron a producir 280 mil barriles cada día. En los primeros meses de este año se ha exportado en promedio 30 mil barriles menos por día que el año pasado. Ya se ha detectado actividad petrolera ilegal dentro del parque Yasuní y empieza a haber rumores –la Ministra María Fernanda Espinosa los negó categóricamente– de que partidarios de explotar el petróleo dentro del gobierno están proponiendo explotar uno de los tres pozos del ITT.

Se calcula que la población en territorio del bloque ITT está entre 2.500 y 3.000 personas, la mayoría kichwas y colonos. Los huaoranis no contactados suelen vivir más al sur, pero no son extraños en el territorio, son grupos nómadas. Han tenido varias reuniones para discutir el tema y aunque los jóvenes veían oportunidades en la explotación de los pozos, la población ha decidido apoyar la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra después de ver lo que ha pasado en la mayoría de las comunidades en donde se ha sacado: bosques destruidos, agua contaminada, comunidades enfrentadas o desaparecidas. Su caso sería peor si cabe, porque al ser crudo pesado, se requiere construir facilidades para calentarlo, hay que mejorar su densidad para que pueda ser bombeado al oleoducto, instalaciones que causarían más daños ecológicos que los de conectar los pozos. Enrique Morales, uno de los expertos ambientales que formó parte de la expedición que visitó los pozos decía que en caso de que Correa decidiera sacar el petróleo "existe un gran consenso entre la población para parar a Petroamazonas, se va a generar un nuevo foco de resistencia". No sería la primera vez que una movilización parase a las petroleras. En Sarayacu, una comunidad kichwa en la provincia de Pastaza, consiguieron parar la explotación del bloque 23 antes de que Correa fuera Presidente.



Las comunidades han pedido ayuda para desarrollar infraestructuras turísticas ecológicas en donde los jóvenes tengan las oportunidades de empleo que hubieran tenido con el petróleo. Piden la construcción de un aeropuerto. Ahora en una lancha rápida se requieren siete horas para llegar a Rocafuerte desde Coca y un par más para penetrar en la selva. Demasiado tiempo para atraer a los turistas.

En Coca, la capital de Orellana, un antiguo embarcadero desde donde misioneros, comerciantes y aventureros accedían a la selva, ahora convirtiéndose de la mano de inmigrantes en busca de oportunidades en una ciudad, había visitado en su despacho a Guadalupe Llori, la Prefecta de la Provincia de Orellana reelegida en las urnas hacía unos meses. Tenía el bastón de mando detrás, en una esquina. Un ordenador y muchos papeles encima de su mesa. Mujer temperamental y carismática, hecha política desde los movimientos sociales, vestía un hermoso colgante de cuentas azules; ella es una indígena kichwa educada por misioneros católicos. Tenía interés en entrevistarla porque su historia concentra bien las propias contradicciones que enfrenta la Revolución Ciudadana.

### **700 soldados participaron en el operativo para detener a una mujer desarmada, desposeyéndola de su cargo de Prefecta.**



Miembro del movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik, un movimiento indígena y socialista, apoyó a Correa como Presidente, hizo campaña por él en Orellana, incluso lo consideraba su amigo, pero un año después, en diciembre del 2007, Correa la mandó a la cárcel por apoyar una movilización popular en Dayuma, el área de la vía Auca donde pobladores ocuparon instalaciones petroleras pidiendo que Petroecuador cumpliera sus obligaciones con las comunidades. Correa decretó el estado de emergencia –en campaña había prometido no usarlo–, los militares aplastaron la resistencia, hubo 27 detenidos y algunos heridos; días después arrestaron a Llori en su casa, 700 soldados participaron en el operativo para detener a una mujer desarmada, desposeyéndola de su cargo de Prefecta, llevaba tres años en el puesto, llevándose a la cárcel de Quito acusándola de “terrorismo, sabotaje y peculado”. Era un aviso de Correa de que nadie podía atentar contra los recursos petroleros del Estado, no

importaban las razones. En Orellana pensaban de otra manera cuando la volvieron a reelegir Prefecta después de salir de la cárcel amnistiada por la Asamblea Constituyente.

Llori decía que después de su experiencia tiene que pisar tierra firme. Pero que “tras 40 años de sufrimiento de los impactos petroleros, de tantos derrames y desastres contra la naturaleza, vamos a hacer una resistencia legal y favorecer la política de dejar el petróleo bajo tierra. Llevamos décadas diciendo que las corporaciones no están en el vacío, están en nuestro territorio, nos hemos organizado y elaboramos procesos de resistencia como pueblos olvidados; hubo muertes de compañeros, encarcelamientos masivos, pero logramos mover el piso a transnacionales y gobiernos y nuestra voz llegó a nivel nacional.... Yo pagué un año de cárcel injusto, fui una prisionera política y de conciencia por defender a mi Pachamama. Mi único delito es defender a un pueblo olvidado después de 40 años de explotación petrolera. Ahora me siento perseguida por el Presidente”.

Correa sabe que una parte de lo que empuja a la resistencia es el abandono de la Amazonía, entregada a las petroleras, madereras y la agroindustria, por parte del Estado. La región que es la fuente de la riqueza nacional vive la situación social y económica más crítica del país. Pero su proyecto no rompe la lógica extractivista al fortalecer la presencia estatal vinculándola a los recursos obtenidos con la extracción de petróleo. Ha doblado el dinero (un dólar por cada barril de petróleo) destinado a Ecorae, una entidad pública que apoya el desarrollo sostenible en la región Amazónica creada en 1992, financiada con el petróleo. ¿Pero por qué los caminos, centros de salud y escuelas de las comunidades más pobres del país deben financiarse en función del petróleo que se extrae en las mismas comunidades?

La represión masiva en Dayuma ha sido hasta ahora más excepción que regla en el gobierno de Correa. La Amazonía ecuatoriana no está sufriendo las políticas de Álvaro Uribe y Alan García. En Colombia usando la guerra para desplazar a la población que se opone a que las grandes corporaciones arrasaran la selva y en Perú atacando los derechos a la resistencia. En junio del año pasado 33 indígenas fueron asesinados en la Amazonía peruana cuando se movilizaban en defensa de su territorio ancestral. Pero con la resistencia indígena a las nuevas leyes mineras y del agua prendiéndose, el tiempo empieza a jugar en su contra. Correa tiene que demostrar que no ha habido un golpe de timón extractivista en su gobierno y sigue fiel a los compromisos sociales adquiridos por la Revolución Ciudadana del Buen Vivir con las comunidades y el medio ambiente. El primer paso es el de firmar el Fideicomiso para salvar al Yasuní ■

